

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO 9º ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019).

Referencia: 110013335 009 **2019 00168 00**
Demandante: Jorge Armando García Ojeda
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional –FOMAG

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

(Inadmite demanda)

1. El señor Jorge Armando García Ojeda, a través de apoderada judicial formuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG para que se declare la existencia y nulidad del silencio administrativo negativo en relación con el derecho de petición radicado el 04 de octubre de 2018, por medio del cual solicitó la devolución y suspensión de los descuentos en salud de las mesadas adicionales de junio y diciembre (fls. 1 - 8).

2. Ahora bien, encontrándose el expediente para decidir sobre la admisión de la demanda, el Despacho advierte lo siguiente:

2.1. De la obligatoriedad de la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad¹.

De conformidad con el CPACA, se tiene que uno de los requisitos de procedibilidad o presupuestos procesales exigidos para formular la demanda a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, se refiere a la conciliación extrajudicial contemplada en el artículo 161 numeral 1 Ibídem, que a la letra señala lo siguiente:

¹ Juan Carlos Garzón Martínez, en su texto "El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo", señala que la conciliación extrajudicial como mecanismo de solución de conflictos, se debe entender como ese procedimiento, en el que las partes que tienen una **controversia** jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral, denominado conciliador, cuya función es proponer fórmulas de acuerdo y dar fe de la decisión de arreglo que acuerden las partes.

<<**Artículo 161. Requisitos previos para demandar.** La presentación de la demanda se someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos:

1. Cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de toda demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales.

En los demás asuntos podrá adelantarse la conciliación extrajudicial siempre y cuando no se encuentre expresamente prohibida.

Cuando la Administración demande un acto administrativo que ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, no será necesario el procedimiento previo de conciliación.>>

De igual modo, se tiene que el Código General del Proceso, estableció respecto de la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos, lo siguiente:

<<Cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los mismos términos previstos para el convocado, con el fin de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado resuelva sobre su intervención o no en el Comité de Conciliación de la entidad convocada, así como en la audiencia de conciliación correspondiente.

No será necesario agotar el requisito de procedibilidad en los procesos ejecutivos, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se adelanten, como tampoco en los demás procesos en los que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial o cuando quien demande sea una entidad pública.

Las entidades públicas en los procesos declarativos que se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra particulares, podrán solicitar las medidas cautelares previstas para los procesos declarativos en el Código General del Proceso>>.

En consideración a que las normas enunciadas atrás no señalaron de manera expresa los criterios que le permitan al juez identificar la naturaleza de los asuntos que eventualmente deberían someterse al trámite de la

conciliación extrajudicial², se considera pertinente recordar que por regla general, **son materia de conciliación aquellos derechos transables que tienen el carácter de inciertos y discutibles³**.

No obstante lo anterior, en reciente jurisprudencia, la exigibilidad del requisito de la conciliación prejudicial pasa a ser analizada en cada caso concreto, atendiendo la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de su debate en el escenario conciliatorio⁴ y como quiera que en el presente caso, se pretende la devolución y suspensión de los descuentos en salud, el objeto del presente asunto no es de contenido laboral, los derechos laborales se predicán de personas naturales, mientras que los aportes en salud son obligación civil de los trabajadores.

Los descuentos los autoriza la ley, como obligación a cargo del trabajador, para poder tener los derechos en salud, de la misma manera que sucede con los aportes para pensión, mientras los pagadores tienen el deber de realizarle los descuentos aludidos que ordena la ley al FOMAG, es derecho económico de las entidades y obligación civil del trabajador, lo que fuerza concluir su carácter conciliable. Por lo anterior, se hace necesario exigir como presupuesto procesal el agotamiento de la conciliación prejudicial.

2.2. No se allegó con la demanda constancia por medio de la cual acredite el último lugar (sitio geográfico) donde la causante prestó sus servicios, información indispensable para determinar la competencia territorial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156, numeral 3ro del CPACA.

² Recordemos que los asuntos que eran sometidos a conciliación prejudicial, en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo, estaban determinados en el Decreto Reglamentario 1716 de 14 de mayo 2009 que a la letra señalaban: "Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.

Parágrafo 1º. No son susceptibles de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo: – Los asuntos que versen sobre conflictos de carácter tributario. – Los asuntos que deban tramitarse mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. – Los asuntos en los cuales la correspondiente acción haya caducado (...).

³ Al tenor del Artículo 53 de la Carta Política, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, son principios fundamentales de carácter laboral.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección "A", auto del 19 de abril de 2012, rad. 44001-23-31-000-2011-00105-01(2029-11), CP. Alfonso Vargas Rincón; Providencia del 09 de abril de 2014, rad. 27001-23-33-000-2013-00347-01(0539-14), CP: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

2.3. Omitió agregar al medio magnético (folio 10), copia de la demanda y los anexos, necesarios para la notificación a la contraparte y a la agente del Ministerio Público, de conformidad con el artículo 166, numeral 5 del CPACA;

2.4. Por lo anterior y conforme con el artículo 170 del CPACA, se inadmitirá la demanda a fin de que la apoderada de la parte demandante la corrija junto con el poder, conforme a lo aquí requerido, so pena de rechazo.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.**,

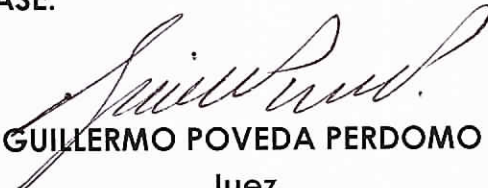
RESUELVE

PRIMERO: INADMITIR la demanda de referencia conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER el término legal de diez (10) días para que la parte accionante subsane la demanda, conforme lo expuesto arriba. Cumplido el plazo anterior vuelva al Despacho para seguir el trámite.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada **Nelly Díaz Bonilla** identificada con cédula de ciudadanía nro. 51.923.737, y T.P. nro. 278.010 del C. S. de la J., como apoderada de la parte demandante en los términos y para los fines del poder que obra en el folio 9 del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTA DC, SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **CATORCE (14) DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

MIRYAM YANNETH MARTÍNEZ CORTÉS
Secretaria